



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/26581
14 de octubre de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

NUEVO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA MISION DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADOR

INTRODUCCION

1. El presente informe tiene por objeto poner al Consejo de Seguridad al corriente de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que forma parte de los Acuerdos de Paz para El Salvador. La Comisión de la Verdad se estableció con arreglo a los Acuerdos de México de 27 de abril de 1991 (S/23130), con el mandato de investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad hacía imperioso que se hiciese conocer con urgencia y cuanto antes la verdad. En virtud de los Acuerdos de México, las partes se comprometían a aplicar las recomendaciones de la Comisión.

2. La Comisión presentó su informe el 15 de marzo de 1993 (S/25500, anexo). Dicho informe contenía unas 40 recomendaciones, indicadas a continuación con arreglo a cuatro epígrafes:

a) Recomendaciones que se derivan directamente del resultado de la investigación de la Comisión;

b) Erradicación de las causas estructurales directamente vinculadas con los hechos investigados;

c) Reformas institucionales para prevenir la repetición de hechos semejantes;

d) Medidas tendientes a la reconciliación nacional.

3. Como indiqué en mi informe de 21 de mayo de 1993 (S/25812, párr. 53), el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión exige la adopción de una amplia gama de medidas administrativas, legislativas y constitucionales. La adopción de esas medidas está a cargo no sólo del Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sino también de particulares e instituciones, en particular la Asamblea Legislativa y la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ). La COPAZ se estableció de conformidad con los Acuerdos de Paz como institución nacional encargada de supervisar la

ejecución de todos los acuerdos, y está integrada por representantes del Gobierno, el FMLN y todos los partidos políticos representados en la actual Asamblea Legislativa.

4. Tras la publicación del informe de la Comisión, los gobiernos expresaron graves reservas con respecto a la aplicabilidad de las recomendaciones de la Comisión. Habida cuenta de esas reservas, así como del número de instituciones que debían participar en el proceso de ejecución, di instrucciones para que se hiciera un análisis detallado de las recomendaciones. En el informe resultante, que se puso a disposición del Consejo de Seguridad el 25 de mayo de 1993 (S/25812/Add.3), se trató de determinar si alguna de las recomendaciones estaba fuera del mandato de la Comisión o era incompatible con la Constitución, y se definieron las medidas que se solicitaban a cada entidad (los "destinatarios"), y en qué plazo. El 20 de mayo de 1993 transmití ese estudio al Gobierno, el FMLN y la COPAZ, y pedí a cada uno de ellos que, antes del 20 de junio de 1993, me presentara un informe sobre las medidas que había adoptado o tenía previsto adoptar para poner en práctica las recomendaciones cuya aplicación se le había encomendado en calidad de destinatario y promover la aplicación de otras recomendaciones. En mis cartas al Gobierno y al FMLN hice hincapié en las medidas que cada uno debía adoptar para promover las recomendaciones dirigidas a la COPAZ en calidad de destinatario.

5. Del análisis realizado por las Naciones Unidas se desprende que solamente una recomendación de la Comisión, la relativa a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, no puede aplicarse por estar en pugna con disposiciones fundamentales de la Constitución y con otras recomendaciones formuladas por la Comisión relacionadas con la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos en virtud de los cuales los ciudadanos no pueden ser privados de sus derechos políticos en la forma recomendada por la Comisión.

I. POSICIONES DEL GOBIERNO, EL FMLN Y LA COPAZ

6. Desde mi último informe, las recomendaciones de la Comisión han suscitado un activo intercambio de opiniones y comunicaciones entre la Secretaría y el Gobierno, el FMLN y la COPAZ. Ello no ha bastado para disipar todas las reservas iniciales del Gobierno. Sin embargo, he insistido constantemente en el compromiso incondicional expresado por los signatarios de los Acuerdos de México de aplicar las recomendaciones de la Comisión; en la obligación de las Naciones Unidas de verificar que los signatarios cumplan con ese compromiso; y en la necesidad de que se hagan gestiones concretas para aplicar las medidas, con miras, no a sancionar a individuos, sino a prevenir la impunidad, fortalecer el sistema judicial y promover el respeto de los derechos humanos y la reconciliación nacional. La ONUSAL ha alentado a los signatarios a adoptar ese enfoque y ha prestado asistencia a las diversas instituciones que participan en el proceso de aplicación. La División de Derechos Humanos, en particular, se ha mantenido en estrecho contacto con el Gobierno en lo que se refiere a los asuntos vinculados con la aplicación, por la División, de las 19 primeras recomendaciones aprobadas por la Comisión de la Verdad.

7. En el correspondiente informe de la ONUSAL, que figura anexo al presente informe, se indica el estado actual de la aplicación de cada una de las recomendaciones de la Comisión. En los casos en que la aplicación de una

/...

recomendación exige la adopción de medidas legislativas, en el informe se indica si, a juicio de la ONUSAL, la medida propuesta refleja plenamente la intención de la Comisión.

8. En respuesta a mi carta de 20 de mayo de 1993, el Gobierno, el FMLN y la COPAZ me comunicaron sus posiciones con respecto a las recomendaciones de la Comisión. En una carta de fecha 11 de junio de 1993 el Coordinador General del FMLN, Sr. Schafik Handal, explicó el enfoque del FMLN con respecto a las dos recomendaciones que le concernían. Dijo que, dado que la inhabilitación de personas para ocupar cargos públicos parecía imposible, el FMLN estaba dispuesto a aceptar un mecanismo de autoinhabilitación por parte de los miembros del FMLN mencionados en la recomendación, a condición de que los funcionarios militares y civiles afectados también hicieran lo propio. El Sr. Handal se refirió asimismo a los esfuerzos del FMLN para promover la aplicación de las recomendaciones dirigidas a la COPAZ.

9. En una carta de fecha 23 de junio de 1993, el Coordinador pro tempore de la COPAZ me comunicó que, aunque esa entidad había comenzado en marzo a analizar el contenido de las recomendaciones de la Comisión, algunas cuestiones requerían una mayor profundización antes de que la COPAZ pudiera pronunciarse al respecto. Sin embargo, la COPAZ tenía el propósito de agilizar el análisis del informe, para poder comunicarme su posición a la mayor brevedad. Posteriormente, el 10 de septiembre de 1993, recibí un informe preliminar de la COPAZ en el que se consignaban las medidas adoptadas con respecto a todas las recomendaciones, bajo los epígrafes I y II (véase S/25500, anexo, secc. V). Este informe se recoge en el informe de la COPAZ sobre la aplicación de las recomendaciones. Se espera recibir muy pronto otro informe de la COPAZ sobre las recomendaciones restantes.

10. Después de varios intercambios de opiniones entre la ONUSAL y el Gobierno de El Salvador, el Presidente Cristiani, en una carta de fecha 13 de julio de 1993, me manifestó que, tras un análisis hecho por el Gobierno de las recomendaciones de la Comisión, en su totalidad, el Gobierno estaría en condiciones de aplicar todas ellas, con excepción de las tres siguientes: a) las separaciones de cargos públicos y las inhabilitaciones para el ejercicio de éstos; b) las reformas constitucionales, y c) las recomendaciones cuya iniciativa y ejecución deberían estar a cargo de los órganos judiciales a través de la Corte Suprema de Justicia. Estas tres categorías se examinan en los siguientes párrafos.

A. Separación del cargo e inhabilitación para ocupar cargos públicos

11. La COPAZ consideró detenidamente las recomendaciones relativas a estas cuestiones y llegó a una conclusión común sobre ellas. En una carta de fecha 9 de agosto de 1993, el Coordinador pro tempore de la COPAZ me comunicó que se había acordado que "el cumplimiento ... debe darse en el marco de garantizar la plena participación de todos los salvadoreños, sin exclusiones, en los destinos del país y dentro del gran propósito de la reconciliación nacional". Sobre la base de esa conclusión, la COPAZ solicitaba mi colaboración "con esta institución creada en virtud de los Acuerdos de Paz, como mecanismo de representación de la sociedad civil salvadoreña, para el logro del propósito enunciado".

/...

12. Recibí posteriormente una carta del Coordinador General del FMLN de fecha 19 de septiembre de 1993, en la que éste subrayaba que las recomendaciones sobre la separación del cargo y la inhabilitación política para ocupar cargos públicos eran independientes entre sí. En su opinión, si bien la inhabilitación para ocupar cargos públicos era inaplicable, la recomendación relativa a la separación del cargo de ciertos funcionarios debía ponerse en práctica. En la carta no se expresaba opinión alguna sobre la aplicabilidad del despido de funcionarios públicos.

13. El mandato encomendado a las Naciones Unidas en El Salvador consiste en verificar que las partes cumplan con los compromisos contraídos en virtud de los Acuerdos de Paz, y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad forman parte integrante de esos acuerdos. Aunque insisto en que los signatarios tienen la obligación de cumplir los compromisos asumidos en virtud de los acuerdos, he indicado ya que si ellos y la sociedad salvadoreña en su conjunto (representada, por ejemplo, por la COPAZ) convinieran en que algunas disposiciones concretas no deberían ponerse en práctica, estaría dispuesto a recomendar al Consejo de Seguridad que el incumplimiento de esas disposiciones no se considerase una violación de los Acuerdos. Los términos de la carta de la COPAZ, aunque no me resultan totalmente claros, parecerían indicar un consenso en cuanto a que las recomendaciones contenidas en las secciones I.A, B y C del informe de la Comisión de la Verdad no deberían ponerse en práctica. Sin embargo, la carta posterior del Coordinador General del FMLN planteaba algunas dudas al respecto. Por estas razones, he decidido recabar aclaraciones de la COPAZ.

B. Reforma constitucional

14. En virtud de la Constitución de El Salvador, la reforma constitucional exige la ratificación de dos legislaturas sucesivas. Por consiguiente, a menos que la actual Asamblea Legislativa ratifique las reformas constitucionales solicitadas por la Comisión de la Verdad, esas reformas sólo podrían ponerse en práctica a partir de 1997, en el supuesto de que fueran ratificadas por la Asamblea Legislativa elegida en marzo de 1994 y por la Asamblea posterior, que se elegiría tres años después. Es por consiguiente imperativo que se adopten las primeras medidas durante el mandato de la actual Asamblea Legislativa.

15. Otra complicación radica en que, con arreglo a la Constitución de El Salvador, el Poder Ejecutivo no puede iniciar las reformas constitucionales. Al ser así, la capacidad del Gobierno para garantizar la aplicación de las enmiendas a la Constitución se ve limitada. Con todo, en mi carta de fecha 20 de mayo de 1993, insistí en que el Gobierno tenía la obligación de adoptar las medidas políticas necesarias para promover la aplicación de las recomendaciones que exigían la modificación de la Constitución. El 9 de agosto de 1993 el Presidente Cristiani comunicó al Presidente de la Asamblea Legislativa que el Gobierno se comprometía a promover cuatro reformas constitucionales necesarias para aplicar las recomendaciones de la Comisión (las recomendaciones III.A.1, 2 y 4, y III.B.2). Indicó también que había informado a las Naciones Unidas de que el Poder Ejecutivo no tenía competencia ni autoridad para introducir reformas constitucionales y que por esa razón había remitido el asunto a la consideración de la Asamblea Legislativa.

16. Aunque entiendo las limitaciones institucionales impuestas a la capacidad del Poder Ejecutivo para promover reformas constitucionales ante el órgano legislativo, confío en que las cuatro enmiendas constitucionales de que se trata, que se refieren a la necesidad de descentralizar las atribuciones y la competencia concentradas actualmente en la Corte Suprema, merecerán el apoyo decidido del Gobierno. La reforma de la Corte Suprema es un elemento importante de la reforma judicial recomendada por la Comisión de la Verdad con miras a garantizar que los responsables de actos de violencia nunca puedan volver a gozar de la impunidad que ha sido característica del reciente conflicto. Por consiguiente, exhorto a los signatarios de los Acuerdos de Paz, y en particular al Gobierno, a que utilicen plenamente las facultades concedidas a la COPAZ para preparar los proyectos de ley relacionados con los Acuerdos.

C. Recomendaciones que deberá poner en práctica la judicatura por conducto de la Corte Suprema de Justicia

17. La Comisión de la Verdad se refirió específicamente al hecho de que algunas de sus recomendaciones requieran la adopción de medidas o iniciativas por parte de órganos estatales distintos del Poder Ejecutivo. La Comisión insistió en que el compromiso asumido por el Gobierno de poner en práctica las recomendaciones le imponía en esos casos la adopción de las medidas e iniciativas necesarias para garantizar la aplicación de las recomendaciones por el mecanismo estatal competente (S/25500, anexo, secc. V.3).

II. OBSERVACIONES

18. Como se desprende claramente del informe de la ONUSAL sobre la aplicación de las recomendaciones, se han adoptado algunas medidas sobre varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad. Sin embargo, no se ha informado aún sobre la aplicación de ninguna de las recomendaciones relativas a la separación del cargo y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a las que exigen enmiendas constitucionales y a las relativas al amparo (III.B.2) y a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (III.B.3). En la mayor parte de los casos, sólo ha habido una aplicación parcial, en la medida en los organismos gubernamentales o los órganos legislativos, están examinando proyectos de ley o el Gobierno está adoptando medidas preliminares.

19. En la reunión de alto nivel celebrada el 8 de septiembre de 1993, en que participó la ONUSAL, el Gobierno y el FMLN estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de agilizar el proceso de aplicación de los Acuerdos con miras a dejar las cosas en claro antes del 20 de noviembre de 1993, fecha de la iniciación de la campaña electoral. Exhorto al Gobierno, el FLMN, la COPAZ y demás instituciones interesadas en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión a que hagan todo lo que está a su alcance para alcanzar este objetivo. A esos efectos, he solicitado a mi Representante Especial, el Sr. Ramírez Ocampo, que preste su asistencia a los que estén interesados en establecer un acuerdo sobre las fechas límites para la aplicación del mayor número posible de recomendaciones pendientes.

20. Tengo el propósito de presentar oportunamente un nuevo informe sobre el asunto al Consejo de Seguridad.

/...

Anexo

INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA COMISION DE LA VERDAD

I. RECOMENDACIONES QUE SE DERIVAN DIRECTAMENTE DEL
RESULTADO DE LA INVESTIGACION*

I.A. Separación del cargo y baja de la Fuerza Armada de los oficiales cuyos nombres figuran en el informe y que están personalmente implicados en la perpetración o encubrimiento de los casos publicados; o que no cumplieron con sus obligaciones funcionales de iniciar o colaborar en la investigación y sanción de los graves hechos de violencia

1. Ocho oficiales de las fuerzas armadas que entran en esta categoría conservan todavía sus puestos. (Respecto de la separación del cargo y la inhabilitación, véanse los párrafos 11 a 13 del cuerpo del presente informe.)

I.B. Separación del cargo de los funcionarios de la administración pública o judicial nombrados en el informe que encubrieron graves hechos de violencia o dejaron de cumplir sus respectivas responsabilidades en la investigación correspondiente

2. Uno de los civiles mencionados en el informe no es actualmente un funcionario público, si bien representa al Gobierno en la COPAZ. También se mencionan en el informe dos jueces y un médico forense. Su separación del servicio corresponde a la jurisdicción del poder judicial. (Respecto de la separación del cargo y la inhabilitación, véanse los párrafos 11 a 13 del cuerpo del presente informe. Debe advertirse también que el Consejo Nacional de la Judicatura ha comenzado el proceso de evaluación de todos los jueces.)

I.C. Inhabilitación de las personas a que se refieren las recomendaciones precedentes, al igual que de cualesquiera otras implicadas en la perpetración de los hechos de violencia descritos, incluso los civiles y los miembros de la Comandancia del FMLN nombrados en las conclusiones sobre casos individuales, para el ejercicio de cualquier cargo o función pública por un lapso no menor de diez años, y para siempre en lo que hace a toda actividad vinculada con la seguridad pública o la defensa nacional

3. En la sección I.C, la Comisión recomendó también que los órganos competentes para designar a quienes habían de ejercer funciones públicas se abstuvieran de designar a las personas mencionadas en la sección I.C. A ese respecto, la presentación por el Gobierno de la candidatura del Presidente de la

* Los títulos remiten a las partes pertinentes del documento S/25500, anexo, sección V.

Corte Suprema de Justicia para ocupar un cargo en el Comité Jurídico Interamericano sería contraria al espíritu, si no la letra, de la recomendación de la Comisión. (Respecto de la separación del cargo y la inhabilitación, véanse los párrafos 11 a 13 del cuerpo principal del presente informe.)

I.D.a) Dimisión de los miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia para permitir la inmediata aplicación de la reforma constitucional relativa a la elección de los magistrados de la Corte

4. Esta recomendación no es vinculante para el Gobierno, pues depende enteramente de que los magistrados de la Corte estén dispuestos a dimitir. Estos magistrados han declarado públicamente que no dimitirán. Cabe señalar que el mandato de los magistrados que componen la Corte vence en junio de 1994. En esa fecha, la nueva Asamblea Legislativa nombrará a los jueces de la Corte con arreglo a las disposiciones de los artículos pertinentes de la Constitución, que se revisarán de conformidad con los Acuerdos de Paz.

5. La COPAZ ha solicitado a la Corte Suprema que informe de los fundamentos jurídicos en que se sustenta su posición a este respecto.

I.D.b) Reforma de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura en virtud de la cual los miembros del Consejo sólo pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas legales precisas

6. Un equipo interinstitucional del Gobierno está elaborando un proyecto de reforma de la Ley sobre el Consejo Nacional de la Judicatura actualmente en vigor, en que se enunciarán las causas precisas de destitución de los miembros del Consejo, sin traspasar esa facultad a la Asamblea Legislativa. A juicio del Gobierno, ese traspaso de facultades exigiría una reforma constitucional. Sin embargo, la ONUSAL opina que la reforma de la Ley sobre el Consejo Nacional de la Judicatura (y no de la Constitución) podría resolver el problema que plantea la recomendación, dado que la cuestión de que se trata está comprendida en lo dispuesto por el artículo 49 de esa Ley.

7. La COPAZ ha decidido definir con precisión las causas de destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

I.E. Reforma de la Ley de Carrera Judicial en virtud de la cual sólo puedan permanecer en la carrera aquellos jueces que, según una rigurosa evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura, hayan demostrado vocación judicial, eficiencia y preocupación por los derechos humanos y ofrezcan garantías de independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad en sus actuaciones

8. La Asamblea Legislativa ha establecido una comisión técnica que elaborará el proyecto de reforma de la Ley de Carrera Judicial, que había sido reformada parcialmente en 1992. No es posible todavía dar información definitiva en

cuanto a la reforma de la ley, pues la comisión que tiene encomendada su formulación no ha producido todavía un proyecto.

9. Cabe observar que el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue elegido por consenso y que viene funcionando desde junio de 1993, ha comenzado recientemente su labor de evaluación de los magistrados. El Consejo ha recabado el concurso de la ONUSAL para allegar información respecto a los magistrados que hubieran cometido irregularidades. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el proceso de evaluación que lleva a cabo el Consejo fortalecerá al poder judicial y que verá con beneplácito sus conclusiones.

10. La COPAZ ha solicitado al Consejo Nacional de la Judicatura que informe de los elementos o criterios que tendrá en cuenta en la evaluación de los jueces.

II. ERRADICACION DE LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS HECHOS EXAMINADOS

Cabal cumplimiento de los Acuerdos de Paz

11. El Secretario General de las Naciones Unidas informa periódicamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General sobre la aplicación de los Acuerdos de Paz. En su informe más reciente al Consejo de Seguridad, de 21 de mayo de 1993 (S/25812), el Secretario General mencionó, entre otros logros del proceso de paz, la cabal observancia por ambas partes de una cesación del fuego prolongada, la celebración de la conclusión oficial del conflicto armado y la transformación del FMLN en partido político. El Secretario General tomó nota también de que se habían logrado avances importantes en lo concerniente a establecer el control civil sobre las fuerzas armadas, al principio de creación de una fuerza de policía civil, a la reconciliación de la sociedad salvadoreña y a la democratización de las instituciones nacionales. Con todo, el Secretario General hizo ver también la necesidad de empeñar nuevos esfuerzos por hacer realidad diversos elementos fundamentales de los Acuerdos de Paz, en especial el programa de transferencia de tierras, el establecimiento definitivo de la Policía Nacional Civil y la recolección de las armas de asalto. El Secretario General presentará su próximo informe al Consejo de Seguridad sobre la aplicación de los Acuerdos de Paz en noviembre de 1993.

II.A. Reformas en la Fuerza Armada

12. Ya se han hecho reformas estructurales en las fuerzas armadas en observancia de lo dispuesto en los Acuerdos de Paz y de conformidad con la reforma constitucional, cuyo objetivo esencial es velar por la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, en el marco del imperio del derecho. Esas reformas comprenden principalmente el retiro de la esfera de competencia de las fuerzas armadas de las funciones de policía; la depuración de las fuerzas armadas, basada en la evaluación de sus miembros por parte de una Comisión especial; la formulación de una nueva doctrina militar y el establecimiento de un nuevo régimen educacional; la reducción aproximadamente a la mitad de las fuerzas armadas; la abolición del Departamento Nacional de Inteligencia, que será sustituido por un nuevo organismo de inteligencia del Estado, bajo control civil; la disolución de los batallones de infantería de despliegue rápido, que

/...

se habían constituido a causa del conflicto armado; y la proscripción de las fuerzas o grupos paramilitares, incluida la disolución de la defensa civil y la abolición del servicio territorial, que ha sido sustituido por un nuevo régimen de reservas. Esas reformas han requerido diversas medidas jurídicas.

II.A.1. Designación de una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para supervisar el tránsito hacia el nuevo modelo de Fuerza Armada

13. Conforme lo estipula su reglamento, la Asamblea Legislativa está facultada para designar comisiones especiales a fin de investigar asuntos de interés nacional y aprobar las conclusiones o recomendaciones que estime apropiadas sobre la base de sus despachos. Todavía no se ha constituido una comisión especial para cumplir los cometidos mencionados en el párrafo II.A.1; sin embargo, la COPAZ ha recomendado oficialmente a la Asamblea Legislativa que ese cometido sea llevado a cabo, con carácter prioritario, por la Comisión de Seguridad Pública y Defensa.

II.A.2, 3 y 4. Revisión integral de las normas militares vigentes

14. Se está dando efecto a esta recomendación por conducto de las reformas y otras medidas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del Poder Ejecutivo. Actualmente la Asamblea tiene ante sí un proyecto de ley orgánica de la defensa nacional, presentado por el Poder Ejecutivo. En relación con los párrafos II.A.2 y 3, ese proyecto se conforma a los recaudos previstos en los Acuerdos de Paz y establece restricciones legales a la norma de la obediencia debida. En cuanto al párrafo II.A.4, el Código de Justicia Militar, que sería la ley aplicable en este caso, no menciona específicamente las penas por violación de los derechos humanos.

15. La COPAZ se ha propuesto examinar la legislación militar vigente a fin de determinar si algunas de sus disposiciones son contrarias a la Constitución. La COPAZ ha convenido también en formular propuestas de reformas en relación con los párrafos II.A.3 y 4, que comprenderán el establecimiento de un régimen para entender en los casos de desobediencia de órdenes ilegales y castigar los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos.

II.A.5. Inclusión del estudio de los derechos humanos en las escuelas militares

16. En los planes de estudio de las escuelas militares y en los cursos militares de posgrado se ha incorporado la enseñanza de los derechos humanos, el derecho constitucional y el derecho internacional humanitario. La División de Derechos Humanos de la ONUSAL cooperará en la revisión general de los planes de estudio con miras a velar por que sean compatibles con los nuevos cursos. La División de Derechos Humanos realiza una activa labor de organización de cursos y seminarios, entre cuyos destinatarios se cuentan los oficiales militares. En esos cursos se hace hincapié en los derechos humanos, la sociología militar y las relaciones entre ejército y sociedad. Los cursos, que se dictan en el

Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto, el Colegio de Estudios Estratégicos Avanzados y otras instituciones, cuentan con el apoyo personal del nuevo Ministro de Defensa que, antes de asumir las actuales funciones, se ocupó de la formulación y aplicación de esos elementos críticos de los Acuerdos de Paz.

17. El 20 de septiembre de 1993 la División de Derechos Humanos presentó al Ministro de Defensa un proyecto titulado "Proyecto de cooperación entre la División de Derechos Humanos de la ONUSAL y el Comando de Doctrina y Entrenamiento Militar". Por conducto de ese proyecto, la División de Derechos Humanos daría apoyo técnico a los docentes militares y civiles de los centros de formación militar. Asimismo, organizaría conferencias y un seminario internacional con participación de expertos extranjeros.

18. Por último, el Consejo Académico del Colegio Militar se ha abocado al examen a fondo de los planes de estudios militares (véase también la sección III.B, recomendación 15 de la División de Derechos Humanos). Conforme a lo acordado por la COPAZ, el Consejo Académico del Colegio Militar se compone de cuatro militares y cuatro civiles, además del Director del Colegio, que lo preside.

19. La COPAZ ha pedido al Ministro de Defensa que presente un informe sobre la cuestión mencionada en la presente recomendación.

II.A.6. Entrenamiento militar en el exterior, en escuelas democráticas y respetuosas de los derechos humanos

20. La presente recomendación se está aplicando en el marco de las reformas de las fuerzas armadas mediante cursos de formación en países democráticos. La COPAZ tomó nota de la información allegada por el Gobierno sobre los convenios en vigor con varios países respecto de la formación técnica del personal militar.

II.A.7. Prioridad a la erradicación de la relación entre militares y grupos paramilitares o ilegales

21. El Tribunal de Honor de las fuerzas armadas se creó conforme a lo estipulado en los Acuerdos de Paz (cap. I.12.C). El Tribunal se compone de siete oficiales (uno de cada rango, desde el rango de General hasta el rango de Alférez) que prestarán servicio por un año; el reglamento interno del Tribunal se presentó a la ONUSAL en 1992. Conforme a lo dispuesto en los Acuerdos, el Tribunal entiende en las causas relativas a actos contrarios al honor militar, sin perjuicio de las actuaciones de la administración de justicia.

22. La ONUSAL no ha advertido ninguna relación institucional entre los miembros de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares o ilegales.

23. La COPAZ ha solicitado al Gobierno que le informe respecto de esta cuestión.

II.B. Reformas en materia de seguridad pública

24. Se han hecho o se están haciendo reformas importantes en la esfera de la seguridad pública, en observancia de los Acuerdos de Paz.

25. Las actividades de la Academia Nacional de Seguridad Pública han mejorado desde que se creó. Han egresado hasta el presente de la Academia seis promociones del ciclo básico. En consecuencia, se ha desplegado aproximadamente 2.000 oficiales de la Policía Nacional Civil en cinco departamentos de El Salvador. También ha habido despliegues parciales en la ciudad capital y en Ursulután. Esos oficiales están ahora bajo el mando de comandantes permanentes.

26. Para el resto del período de transición, hasta que la Policía Nacional Civil esté enteramente desplegada, ingresarán mensualmente unos 400 estudiantes del ciclo básico. De resultados de ello, en julio de 1994 habrán egresado en total alrededor de 5.700 agentes de policía. El segundo curso de la Academia, a nivel ejecutivo y principal, comenzará en breve. De ese curso egresarán en total 240 oficiales de policía.

27. De acuerdo con el plan presentado por el Gobierno, la Policía Nacional Civil estará desplegada en ocho a diez departamentos a fines de 1993. El despliegue completo en los 14 departamentos de El Salvador concluiría entre agosto y octubre de 1994. El Gobierno ha informado a la COPAZ de su plan para desplegar las divisiones funcionales de la Policía Nacional Civil. Ya ha comenzado en la Academia la formación del futuro personal de las Divisiones de Tráfico y Hacienda. Su despliegue deberá comenzar en octubre y noviembre de 1993, respectivamente. El 11 de octubre de 1993, el Gobierno presentó un plan operacional para dar de baja gradualmente a los efectivos de la Policía Nacional.

28. Para hacer realidad este elemento esencial de los Acuerdos de Paz se necesita una asignación apropiada de recursos, con el debido apoyo de la asistencia técnica y financiera permanente de la comunidad internacional.

29. Al reclutar los efectivos de la Policía Nacional Civil se mantiene un equilibrio entre los candidatos del FMLN y los de la Policía Nacional. Cada categoría tiene una representación de 20% en los niveles básico, ejecutivo y principal. El 60% restante de los candidatos proviene de personal de carácter enteramente civil. Causó inquietud el nombramiento, el 1º de junio de 1993, de un ex capitán del ejército y Jefe de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico para ocupar el cargo de Subdirector de la Policía Nacional Civil. El Gobierno informó a la ONUSAL de que el ex capitán había dimitido del Ejército antes del nombramiento, que era de carácter político y no constituía un puesto de carrera. El Gobierno declaró también que ese funcionario tenía una amplia formación en actividades de policía, factor considerado importante dada la descripción de su cargo. El FMLN objetó el nombramiento. La cuestión se zanjó el 8 de septiembre cuando el FMLN aceptó el nombramiento con carácter excepcional y a condición de que no estableciera un precedente. Para los otros dos cargos políticos en la Policía Nacional Civil, a saber, el de Director General y el de Subdirector de Gestión, se ha nombrado a personal civil.

30. De conformidad con los acuerdos suplementarios concertados el 22 de diciembre de 1992, los miembros de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico y de la

/...

Comisión de Investigación de Hechos Delictivos podían ser trasladados a las divisiones funcionales correspondientes de la Policía Nacional Civil luego de una evaluación que verificaría la ONUSAL y de cursos adicionales que seguirían en la Academia. La evaluación del personal y los cursos adicionales comenzaron en agosto. La ONUSAL inició la verificación del proceso, a petición del Gobierno, el 10 de septiembre. Algunos funcionarios de la Unidad Ejecutiva Antinarcótico ya se han incorporado a la Policía Nacional Civil, aunque la ONUSAL no ha podido todavía concluir su labor de verificación. En especial, cabe decir que la ONUSAL no ha recibido la información que había solicitado al Gobierno, como la lista de funcionarios de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico y de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos al 22 de diciembre de 1993 y otros documentos. Todavía no se ha dado respuesta a las recomendaciones de la ONUSAL respecto de los traslados.

31. La COPAZ ha instado al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos por respetar el carácter civil de la Policía Nacional Civil.

II.C. Investigación de grupos ilegales

32. Los casos de ejecuciones arbitrarias ocurridos en los últimos meses han hecho nacer la preocupación de que existen grupos ilegales cuyos métodos parecen repetir las pautas de conducta que habían imperado anteriormente. Como se explica infra, el Gobierno ha convenido en dar prioridad a la investigación de las ejecuciones arbitrarias. De conformidad con esa decisión, se ha establecido un procedimiento en virtud del cual la División de Derechos Humanos de la ONUSAL presenta al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia y a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos una lista de casos que requieren investigación especial.

33. Cabe observar que la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos será disuelta en breve y quedará integrada en la Policía Nacional Civil en calidad de "División de Investigación de Hechos Delictivos". Sus funcionarios serán trasladados a la Policía Nacional Civil conforme al procedimiento indicado en la sección II.B supra. La División de Investigación de Hechos Delictivos de la Policía Nacional Civil, bajo la dirección funcional del Procurador General y en coordinación con la ONUSAL, dará alta prioridad a la investigación de los grupos ilegales.

34. Entre las medidas encaminadas a prevenir la reaparición de grupos ilegales se contaron la disolución de la defensa civil y la abolición del antiguo servicio territorial, que será sustituido por un nuevo régimen de reservistas de las fuerzas armadas. La COPAZ, debido a otras prioridades, ha abandonado las deliberaciones relativas a un proyecto de ley reglamentario de las entidades de seguridad privadas; se estima que esas deliberaciones, que se reanudarán en breve, permitirán elaborar un proyecto que se presentará a la Asamblea Legislativa. La COPAZ dará primero cima a un proyecto de ley sobre el control de armas. El Gobierno ha preparado su propio proyecto de ley, que recientemente envió a la Asamblea Legislativa (véase también la sección III.B).

35. La investigación a fondo del fenómeno de los grupos ilegales, con la mira de impedir su reaparición, es una prioridad que siempre ha tenido presente la COPAZ. Esa posición se reflejó en la comunicación que recientemente cursó al

Presidente de la República, en la cual le instó a utilizar todos los medios a su disposición para resolver expeditivamente la cuestión.

III. REFORMAS INSTITUCIONALES PARA PREVENIR LA REPETICION
DE HECHOS SEMEJANTES

III.A. Administración de justicia

Profundización de la reforma judicial

36. Varias de las recomendaciones contenidas en la presente sección requieren reformas de la Constitución. El Presidente envió un mensaje a la Asamblea Legislativa pidiendo que examinara las recomendaciones III.A.1, 2 y 4 y III.B.2. Conforme a la Constitución de El Salvador, para la reforma de la ley fundamental se requiere como mínimo la petición de diez legisladores. (Respecto de las reformas constitucionales, véanse los párrafos 14 a 17 del cuerpo del informe.)

37. Sin embargo, en lo que se refiere a la responsabilidad administrativa de los magistrados ante el Consejo Nacional de la Judicatura (III.A.3), contrariamente a la opinión de la ONUSAL de que se requiere una reforma constitucional, el Presidente opina que se puede dar efecto a esa recomendación mediante reformas de la legislación.

38. Se están aplicando gradualmente otras recomendaciones de reforma judicial que no requieren una reforma de la Constitución. Se ha iniciado un proceso de consulta pública respecto de los proyectos, preparados por el Ministerio de Justicia, de un nuevo Código de Procedimientos en lo Penal y de una ley relativa a la delincuencia juvenil. En el proyecto de Código de Procedimientos en lo Penal se prevén las audiencias orales y el acceso del público a todas las etapas de las actuaciones judiciales, con lo que se garantizaría el derecho a la defensa del acusado. Se están estudiando los proyectos de un nuevo Código Penal y de una nueva ley sobre establecimientos penitenciarios. La Asamblea Legislativa ya ha sancionado diversas reformas de la legislación vigente. Otras reformas están siendo objeto de estudio o se han cursado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

III.A.1. Desconcentración de las funciones de la Corte Suprema
y de su Presidente

39. Para dar efecto a esta recomendación es menester reformar la Constitución. (Respecto de la reforma constitucional, véanse los párrafos 14 a 16 del cuerpo del presente informe.)

40. El Gobierno ha informado a la ONUSAL de que el Poder Judicial había constituido una comisión para propiciar reformas administrativas encaminadas a descentralizar las funciones de la Corte Suprema.

III.A.2. Nombramiento y remoción de los jueces por el Consejo Nacional de la Judicatura

41. Para dar efecto a esta recomendación se requiere una reforma constitucional. (Respecto de la reforma constitucional, véanse los párrafos 14 a 16 del cuerpo del presente informe.)

42. Sin embargo, el flamante Consejo Nacional de la Judicatura ha comenzado ya el proceso de selección de abogados para su nombramiento en calidad de jueces de paz por la Corte Suprema de Justicia.

III.A.3. Responsabilidad administrativa de los jueces ante el Consejo Nacional de la Judicatura

43. Para dar efecto a esta recomendación se requiere la reforma de la Ley Orgánica Judicial - respecto de la cual no se ha adoptado iniciativa alguna - y de la Ley de Carrera Judicial, que está estudiando la comisión técnica especial de la Asamblea Legislativa mencionada en la sección I.E. supra.

III.A.4. Ente especial independiente a cargo de la autorización y regulación de la profesión de abogado o notario

44. Para dar efecto a esta recomendación se requiere una reforma constitucional. (Respecto de la reforma constitucional, véanse los párrafos 14 a 16 del cuerpo del presente informe.)

III.A.5. Creación de nuevos tribunales y mejora de situación salarial de los jueces

45. La Corte Suprema de Justicia había estado creando nuevos juzgados y mejorando los sueldos de los jueces antes de darse a conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Desde 1989, el número de juzgados ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, el número de juzgados de primera instancia pasó de 87 en 1989 a 120 en marzo de 1993. Desde 1989 casi se han duplicado los emolumentos de los jueces. Conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Paz, se están aumentando gradualmente las consignaciones de fondos con destino al Poder Judicial.

46. En 1992 se crearon los Juzgados de Paz Nos. 9 y 10 en San Salvador y juzgados civiles y de menores en las zonas circundantes (Soyapango y San Marcos); también se crearon la tercera cámara de apelaciones en lo civil (primer sector central), la tercera cámara de apelaciones en lo penal (primer sector central), dos cámaras de segunda instancia (el sector oriental segundo y tercero), el segundo juzgado civil en San Miguel y el tercer juzgado penal en San Miguel.

III.A.6. a) a d). Robustecimiento de la vigencia del
debido proceso

47. Dar efecto a la presente recomendación es un proceso permanente. La Asamblea Legislativa, a iniciativa del Poder Ejecutivo, ha adoptado medidas importantes con esa finalidad, como la abolición del requisito de que los jueces inferiores consulten con los superiores y la aprobación de las reformas propuestas por el Ministerio de Justicia en el actual Código de Procedimientos en lo Penal respecto de los derechos de los acusados. El derecho a las garantías procesales se ha reforzado en los proyectos del nuevo Código Penal y del nuevo Código de Procedimiento en lo Penal. Se están aplicando o se encuentran en curso de aprobación diversas medidas administrativas con igual finalidad.

48. En cuanto a lo indicado en inciso a), la Ley de Defensoría Pública prohíbe la interrogación policial sin la presencia de un abogado. Además, el Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley que expresamente declara nulas las confesiones extrajudiciales; la cuestión mencionada en el inciso b) está incluida en el proyecto de Código de Procedimiento en lo Penal; en cuanto al inciso c), si bien se han hecho algunos progresos, la Policía Nacional no acata enteramente los requisitos relativos a los plazos máximos; a la cuestión a la que se hace referencia en el inciso d) se dará efecto mediante los instrumentos mencionados en relación con los incisos a) y b).

III.A.7. Prioridad que deberá darse a la Escuela de
Capacitación Judicial

49. La Escuela de Capacitación Judicial depende ahora del Consejo Nacional de la Judicatura, que se ha empeñado en mejorar y fortalecer la institución y está gestionando la obtención de asistencia técnica internacional. El Gobierno ha dado su respaldo a esas gestiones.

50. En el Programa de Reconstrucción Nacional se estima que las necesidades de financiación externa de la Escuela, ascenderían en 1993-1996 a 12 millones de dólares; de esa suma, se dispone de 3,9 millones de dólares (900.000 dólares del Gobierno de El Salvador y 3 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo Internacional), con lo cual el saldo sin financiación ascendería a 8,1 millones de dólares.

III.B. Protección de los derechos humanos

51. Como se indica infra, muchas de estas recomendaciones se encuentran en proceso de aplicación y otras son objeto de consultas. El Gobierno y la División de Derechos Humanos de la ONUSAL celebran reuniones bilaterales periódicas para examinar esos asuntos.

52. Seguidamente figura la evaluación detallada del estado de aplicación de las recomendaciones de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL.

a) Ratificación de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, incluidos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El Gobierno se ha declarado dispuesto a ratificar las convenciones de derechos humanos en el futuro inmediato, o a adherirse a ellas, con la excepción de la convención relativa a la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a los convenios de la OIT, el Gobierno ha hecho saber que esa cuestión se atenderá en el marco de las consultas que se celebran en el Foro de Concertación Económica y Social;

b) Reforma orgánica y funcional del sistema judicial. La aplicación de esta recomendación entraña la realización de reformas constitucionales; no obstante, por el momento se están efectuando algunas reformas normativas en esa dirección, varias de las cuales ya han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, y el Poder Judicial está considerando otras (véase también la sección III.A.6);

c) Creación de una Comisión Indagatoria ad hoc para investigar las ejecuciones arbitrarias. El Gobierno ha manifestado que está dispuesto a dar prioridad a la investigación de los casos de posibles ejecuciones arbitrarias que han indicado la ONUSAL y las organizaciones no gubernamentales; no obstante, ha declarado que es imposible crear una Comisión Indagatoria ad hoc, habida cuenta de que ese mecanismo de investigación no se contempla en la estructura institucional del país. Por ello, el Gobierno ha decidido atenerse al fondo de la recomendación estableciendo un mecanismo para investigar los casos que la ONUSAL considere oportuno;

d) Medidas para hacer eficaces y accesibles los recursos de hábeas corpus y de amparo. El Gobierno ha sometido a debate nacional un proyecto de ley por el que se reforma la legislación en materia de hábeas corpus. En términos generales, el proyecto constituye una medida positiva, aunque se podría ampliar para brindar una protección más eficaz. A los efectos de garantizar plenamente el hábeas corpus, habría que efectuar reformas constitucionales que asegurasen el acceso sin obstáculos de los perjudicados al órgano jurisdiccional competente, que en la actualidad es únicamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema. La recomendación relativa al recurso de amparo está pendiente de aplicación, ya que todavía no se han formulado propuestas;

e) Fondo de indemnizaciones a las víctimas. El Gobierno está efectuando una evaluación preliminar de esta recomendación, que incluye un estudio de los diversos modos de establecer el Fondo (véase también la sección IV infra). La Comisión de Derechos Humanos para El Salvador, que es una entidad no gubernamental, ha preparado un proyecto de ley de creación de un fondo especial de indemnizaciones y reconciliación nacional que ha presentado a la Asamblea Legislativa. El proyecto contiene elementos constructivos que se deberían tener en cuenta al aplicar la recomendación;

f) Perfeccionamiento de la composición y las atribuciones del Consejo Nacional de la Judicatura e independencia de la Escuela de Capacitación Judicial. Esta recomendación entraña la modificación de la Ley del Consejo

Nacional de la Judicatura y de la Constitución. Aún no se ha puesto en marcha el procedimiento para aplicarla;

g) Eliminación de la confesión extrajudicial. Ha disminuido el número de casos de confesiones extrajudiciales merced a la nueva Ley de Defensoría Pública y a la reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal en relación con la organización de la defensa del acusado. Además, el Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley para invalidar concretamente la confesión extrajudicial. La aprobación de este proyecto de ley, una vez que se haya consultado al Poder Judicial y el proyecto sea presentado a la Asamblea Legislativa, constituiría una importante medida con miras a la aplicación de esta recomendación (véase también la sección III.A.6);

h) Tipificación de la tortura y las desapariciones forzadas como delito en una ley penal especial. En el proyecto del nuevo Código Penal, preparado por el Ministerio de Justicia, se tipifica la tortura como delito contra los derechos fundamentales de la persona. También se tipifican las desapariciones forzadas en general, las desapariciones forzadas en cumplimiento de órdenes oficiales y las desapariciones forzadas que entrañan responsabilidad por permitir o consentir la comisión de ese delito. Esta recomendación, que comenzó a aplicarse a raíz de la propuesta formulada por el Ministerio de Justicia, culminará en la aprobación de la ley correspondiente (véase la sección III.B.6);

i) Ley para regular la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Ministerio de Justicia ha adoptado la primera medida al respecto, consistente en la preparación de un proyecto de ley sobre normas relativas al arresto administrativo, cuyo objetivo es evitar el recurso excesivo y abusivo a la fuerza física con motivo de las detenciones; la aprobación del proyecto de ley entrañará la incorporación al derecho interno del "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (véase también la sección II.B.4.a);

j) Eliminación de las detenciones arbitrarias por la policía. La ONUSAL está impulsando la aplicación de esta recomendación, en coordinación con la Policía Nacional, la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema y los municipios. En espera de que se reforme la legislación, se están llevando a cabo varios procesos de verificación y se ha aprobado una instrucción policial encaminada a reducir el número de detenciones arbitrarias (véase también la sección III.B.4.a);

k) Aplicación transitoria de la Ley de Procedimientos para la Imposición de Arrestos o Multas Administrativas. El objetivo de la instrucción policial mencionada en el apartado anterior es aplicar la Ley de Procedimientos para la Imposición de Arrestos o Multas Administrativas (Decreto No. 457), en sustitución de las disposiciones obsoletas de la Ley de Policía de 1886 y de los procedimientos ilícitos. Es urgentemente necesario establecer un programa para la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal y la Unidad Especial Antinarcotráfico en el que se establezca la aplicación obligatoria del Decreto No. 457 durante el período de transición, es decir, hasta que se derogue la Ley de Policía de 1886 y se excluyan las faltas de la jurisdicción de la policía;

l) Modificación del régimen disciplinario de la ley de la carrera judicial para que la Corte o su Presidente investiguen de oficio las irregularidades o violaciones al debido proceso. La ONUSAL ha estado evacuando consultas con la Corte Suprema de Justicia con miras a la aplicación de esta recomendación, lo que resulta indispensable para garantizar eficazmente el debido proceso, en particular en relación con el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente en un plazo razonable y el derecho a un juicio imparcial;

m) Autorización para la visita del Comité de Libertad Sindical de la OIT. El Comité efectuará la visita pendiente, con lo que se cumplirá esta recomendación;

n) Investigación de violaciones al debido proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia. El régimen disciplinario establecido en la Ley de la Carrera Judicial no se ha modificado aún a los efectos de que la Corte o su Presidente investiguen de oficio las irregularidades o violaciones al debido proceso, particularmente las irregularidades indicadas por la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. La División de Derechos Humanos ha facilitado a la Corte Suprema una lista de casos que parecen entrañar la responsabilidad de algunos jueces. La Corte está investigando esos casos;

o) Otorgamiento de personería jurídica a asociaciones y sindicatos. Esta recomendación sigue pendiente de cumplimiento, a pesar de que se han realizado algunos progresos en el marco del mecanismo de consultas;

p) Formación militar. Esta recomendación, que se está aplicando, entraña, por su propia naturaleza, un proceso que debe continuar. La División de Derechos Humanos propondrá un programa concreto de cooperación a la Fuerza Armada al respecto (véase también la sección II.A.5);

q) Recolección de armas de guerra. Esta recomendación ha comenzado a aplicarse parcialmente. El Gobierno se ha comprometido a recoger las armas que aún se encuentran en poder de varias instituciones y a sustituirlas por otras adecuadas antes del 20 de noviembre. Las restantes armas militares que se encuentran en posesión de civiles o de personal no militar serán recolectadas una vez que se apruebe la "Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares", cuyo proyecto fue presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa el 25 de agosto de 1993. Se está examinando con miras a su presentación a la Asamblea Nacional otro proyecto de ley relativo a la misma cuestión, que ha sido preparado por la COPAZ;

r) Autonomía presupuestaria de la Procuraduría. Esta recomendación se debe aplicar en el marco de las normas generales de contabilidad del Estado. No obstante, no han comenzado aún las correspondientes consultas entre el Gobierno y la Procuraduría;

s) Facilitación y no entorpecimiento de las actividades de las ONG. Aún hay ONG que no han sido reconocidas legalmente.

III.B.1. Fortalecer la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos

53. La Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos está aplicando las recomendaciones de conformidad con el calendario establecido. Ya se han constituido oficinas regionales en tres ciudades (Santa Ana, San Vicente y San Miguel). A este respecto, se ha firmado un acuerdo oficial de cooperación con la ONUSAL.

III.B.2. Hacer efectivos los recursos de hábeas corpus y amparo; ampliar la competencia de los jueces y asegurar que estos recursos nunca puedan suspenderse como garantías

54. Con arreglo a las disposiciones de la Constitución en vigor (art. 29), los recursos de amparo y hábeas corpus no se pueden suspender ni siquiera cuando se declara el estado de excepción.

55. El Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley de hábeas corpus. El proyecto satisface los requisitos de protección de la libertad de la persona y otros derechos fundamentales conexos y hace extensiva a los tribunales de apelación la jurisdicción en materia de hábeas corpus.

56. Es preciso modificar la Constitución para que tengan también esa jurisdicción los tribunales de primera instancia y los jueces de paz (véanse los párrafos 14 a 16 del cuerpo del presente informe en relación con la cuestión de la reforma constitucional).

57. Habida cuenta de que no se ha formulado hasta la fecha ninguna propuesta en relación con el recurso de amparo, aún está pendiente de aplicación la totalidad de la correspondiente recomendación (véase también la sección III.B, recomendación 4).

III.B.3. Rango constitucional de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales sobre la materia

58. El Gobierno ha informado a la ONUSAL de que promoverá la ratificación, con las reservas que proceda por motivos constitucionales, de los siguientes instrumentos internacionales sobre derechos humanos: el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; el Protocolo Complementario de la Convención interamericana sobre derechos humanos en relación con los derechos económicos, sociales y culturales; y la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer.

59. Por otra parte, el Gobierno ha informado a la ONUSAL de que no propugnará la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

60. La recomendación 1 de la sección III.B también hace referencia a la misma cuestión.

III.B.4.a) a c). Revisión del régimen de detenciones administrativas

61. El Ministerio de Justicia ha informado a la Asamblea Legislativa de que, en un proyecto de ley que le presentará en breve, se contempla una drástica reducción del régimen de detenciones administrativas.

62. En relación con los incisos a) y b), el Ministerio de Justicia ha preparado los siguientes proyectos: un proyecto de reglamento sobre las detenciones efectuadas por la policía (con el propósito de evitar el recurso excesivo a la violencia durante las detenciones). El proyecto se hace eco del "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y un proyecto relativo a la reducción de los plazos de detención administrativa, con objeto de que el sospechoso sea puesto a disposición de las autoridades judiciales dentro de las 24 horas siguientes a su detención.

63. El objetivo contemplado en el inciso c) únicamente se puede alcanzar si se deroga la Ley de Policía de 1886. El Gobierno ha aceptado hacerlo, aunque no ha preparado aún ningún proyecto de ley. Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha propuesto la preparación de una ley por la que la competencia de la policía en materia de faltas quedaría exclusivamente en manos de los jueces de paz, con miras a que se respete el principio del monopolio de jurisdicción. La División de Derechos Humanos está cooperando con el Ministerio a tal efecto.

III.B.5. Extender el sistema de información sobre detenidos con la participación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos

64. Se considera que el actual sistema de información de la Corte Suprema se hace eco de la situación existente. Las actividades encaminadas a hacer extensivo el sistema de información sobre detenidos a la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos se debe realizar en coordinación con la Corte.

65. El sistema computadorizado de la Corte Suprema incluye a todas las personas detenidas judicial y extrajudicialmente en el país. El sistema está a disposición de la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, que está organizando su propio sistema. No obstante, se informa a la Procuraduría de todas las detenciones, tal como se estipula en la Constitución de la República (art. 194.I.5).

III.B.6. Nuevos tipos de delitos

66. En el proyecto de Código Penal que está preparando el Ministerio de Justicia se tipifican nuevos delitos cometidos con el apoyo directo o indirecto de los órganos del Estado. Entre los delitos relativos a las garantías fundamentales de la persona figuran la tortura cometida por funcionarios. En el proyecto de Código se tipifica el caso del funcionario que, teniendo poder para ello, no impide o previene la tortura. También se tipifican el genocidio y las desapariciones forzadas cuando son responsables de ellas los funcionarios. Se

prevén penas para las personas culpables de permitir la comisión de esos delitos por otras personas. La ONUSAL está evaluando esas modificaciones.

III.B.7. Indemnización para las víctimas de violaciones de derechos humanos

67. El Código Penal en vigor contempla la indemnización de los daños causados por la comisión de un delito en el marco de las "consecuencias civiles de un delito", de conformidad con las normas establecidas en materia de secuestro. Según el proyecto de Código Penal, la reparación de los daños se efectuará en el marco de las denominadas consecuencias civiles de un acto punible.

68. En el proyecto de Código Procesal Penal se establece un método de indemnización que se inicia mediante la presentación de la correspondiente solicitud ante el tribunal que falló en el procedimiento penal. Si el tribunal lo considera procedente, ordenará que se indemnicen los daños, tras celebrar una Vista para determinarlos. Aunque la reforma propuesta no constituye "una solución sencilla, rápida y accesible", tal como recomendó la Comisión de la Verdad, tiene la ventaja sobre el procedimiento vigente de que, al ser un procedimiento especial, la indemnización se puede evaluar mejor e incluso puede dar lugar a una solución de avenencia en determinados casos.

69. A pesar de lo que antecede, sería deseable que, tal como recomendó la Comisión, se aprobasen leyes para diferenciar entre los procedimientos de indemnización contemplados en los códigos y los procedimientos de indemnización que dimanen de violaciones de los derechos humanos.

III.B.8. Ratificación de instrumentos internacionales y aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

70. Tiene validez el comentario relativo a la sección III.B.3.

III.C. Policía Nacional Civil

III.C.1. Puesta en práctica del mecanismo de investigación dentro de la Policía Nacional Civil y disolución de la Comisión de Hechos Delictivos

71. Tiene validez el comentario relativo a la sección II.C.

IV. MEDIDAS TENDIENTES A LA RECONCILIACION NACIONAL

IV.A. Fondo especial de indemnizaciones para las víctimas

72. Antes de adoptar una decisión definitiva, el Gobierno está realizando un estudio de viabilidad encaminado a: a) determinar quienes serán los posibles beneficiarios del fondo especial; b) determinar los gastos que entrañará ese

fondo; y c) examinar la posibilidad de obtener los recursos necesarios (véase la sección III.B, recomendación 5).

IV.B. Construcción de un monumento nacional con el nombre de las víctimas, reconocimiento de la honorabilidad de las víctimas y establecimiento de un feriado nacional

73. El Gobierno está procediendo a seleccionar un lugar para la construcción del monumento nacional. La honorabilidad de las víctimas y el clima de reconciliación se ponen de manifiesto en las declaraciones públicas de ambas partes. La Asamblea Legislativa ha establecido el 16 de enero como día feriado nacional.

IV.C. Foro de la Verdad y la Conciliación

74. La COPAZ adoptará probablemente en breve una decisión en relación con el examen de las recomendaciones.

IV.D. Medidas internacionales de seguimiento

75. Las Naciones Unidas están realizando y realizarán un seguimiento constante.
